

Explosión social en sistemas políticos estables: los movimientos mapuche y estudiantil en el Chile de la tercera ola.

Germán BIDEGAIN PONTE
4º Congreso de Ciencia Política, Montevideo, Uruguay 2012¹

Nota previa:

Este texto es una versión reducida de mi proyecto de investigación doctoral. Presento aquí las secciones correspondientes a las principales inquietudes teóricas y empíricas del mismo, de modo de poder discutirlos en el Congreso de Ciencia Política antes de comenzar el trabajo de campo. El diseño de investigación no se encuentra en este texto, pero podrá ser discutido en el Congreso

Resumen

El concepto de Estructura de Oportunidad Política es una de las piedras angulares de la literatura sobre movimientos sociales y contienda política. Reconociendo su importancia, pero destacando las limitaciones que su rigidez impone a la comprensión de los fenómenos políticos y sociales de países con estructuras políticas estables, se afirma que es necesario desarrollar un enfoque relacional e histórico entre instituciones políticas y movimientos sociales. En esta investigación, y a través del estudio de dos de los movimientos más importantes en Chile de la post-transición (mapuches y estudiantes), se avanzará en este sentido. Dos postulados guiarán el trabajo. En primer lugar, para comprender la movilización social se debe prestar especial atención a la relación dinámica a través del tiempo entre organizaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y el gobierno. En un contexto democrático, los tres tipos de actores buscarán afectar la opinión pública para avanzar sus intereses. En segundo lugar, que independientemente de su simpatía con los reclamos, los gobiernos buscarán siempre minimizar la movilización social disruptiva. En base a estos postulados, se hipotetiza que la constante movilización y radicalización de algunos sectores del movimiento mapuche desde fines de los noventa y el crecimiento de las protestas estudiantiles en los últimos años, se explican en buena parte por el desgaste de las relaciones entre organizaciones civiles y el sistema político institucional, así como por la falta de voluntad gubernamental por alterar aspectos estructurales del modelo socio-económico de desarrollo, reclamo fundamental de estos actores sociales.

Palabras clave

Chile – Movimiento estudiantil – Movimiento mapuche – Estructura de Oportunidades Políticas

¹ Una versión similar fue presentada en el séptimo Congreso Chileno de Sociología en octubre de 2012 en Pucón, Chile.

Introducción

“El hecho histórico es evidente: las masas populares han desaparecido de las calles. Tanto así, que no pocos intelectuales de pasado socialista y presente neoliberal han proclamado con cierta alegría secreta el fin de los 'movimientos sociales'. Y denuncian con júbilo: las masas están ahora comprando en los *malls* y en los grandes supermercados, haciendo debido uso de sus tarjetas de crédito y de sus respectivos celulares'.” (Salazar², 2007: 26)

Desde abril hasta diciembre de 2011, Chile vivió las movilizaciones sociales más importantes que se hayan conocido desde el retorno a la democracia en 1990. Su larga duración³, la cantidad de personas movilizadas⁴, el impacto político y mediático, así como el nivel de respaldo ciudadano⁵ logrado, son algunos de los elementos que opacan la magnitud de cualquier otro movimiento previo desde el fin de la dictadura.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por desactivar el conflicto y de algunos vaivenes en la intensidad de la movilización, en octubre de 2012 el movimiento sigue

² Premio Nacional de Historia de Chile 2006.

³ Más de siete meses al momento de escribir este proyecto.

⁴ Según Carabineros en la marcha del 21 de agosto hubo 100.000 manifestantes, según la líder estudiantil Camila Vallejo, cerca de un millón. Ver La Tercera, edición del 22/08/2011, disponible en línea en : <http://diario.latercera.com/2011/08/22/01/contenido/pais/31-81012-9-estudiantes-logran-masiva-convocatoria-e-insisten-en-educacion-gratuita.shtml> [consultado el 21/11/2011]. También según carabineros, para el 26 de junio había en Región Metropolitana 232 colegios tomados por los estudiantes. Ver La Tercera, edición del 26/06/2011, disponible en línea en : <http://latercera.com/noticia/educacion/2011/06/657-376037-9-conoce-la-lista-de-los-232-colegios-metropolitanos-que-se-mantienen-en-toma.shtml> [consultado el 05/12/2011]

⁵ La encuesta Adimark de septiembre 2011 indicaba que un 79% de la población estaba de acuerdo en ese momento con los reclamos estudiantiles. Para el mes de agosto, el Barómetro de la Política CERC afirmaba que un 89% de la población apoyaba las demandas estudiantiles.

vivo. El conflicto estudiantil de 2011 parece estar lejos de ser resuelto. A diferencia de la imagen tradicional de Chile proyectada al mundo, Chile es en estos días una sociedad muy movilizadora. ¿Cómo explicar la flagrante distancia entre la visión preponderante desde el retorno de la democracia de Chile como una sociedad sumamente estable y desmovilizada y los hechos que han caracterizado el año 2011 y duran hasta hoy? Este enigma empírico motiva una pregunta teórica más relevante: ¿Por qué surgen episodios de contienda en contextos estables?

Las razones que han motivado la sorpresa ante las recientes movilizaciones en Chile hacen de este país un caso crucial para abordar la pregunta teórica recién planteada (Eckstein, 1975; Gerring, 2007a). La hipótesis principal de esta investigación es que en sistemas políticos altamente estables como el chileno, el distanciamiento entre los actores políticos institucionalizados y las organizaciones sociales reduce las capacidades del Estado para desmovilizar y contener la acción colectiva disruptiva. En casos como el de Chile, donde la estabilidad política se basa en buena parte por un sistema institucional cerrado a las demandas sociales y cerrado a la entrada de nuevos actores políticos, las relaciones informales entre actores sociales y miembros del sistema político institucional se vuelven la pieza clave de la estabilidad. Esto implica una visión dinámica de interacción entre actores que exige una mirada histórica, particularmente necesaria en países donde no puede explicarse la movilización por shocks particulares (económicos, políticos, etc.).

En el caso chileno, un progresivo alejamiento entre algunas organizaciones sociales y los gobiernos de la Concertación conspiraron contra la capacidad estatal de desmovilización, motivando la re-movilización progresiva de los actores sociales.

La tesis de la “desmovilización” de las organizaciones de la sociedad civil después de la transición gracias a la habilidad de los gobiernos de la Concertación ha recibido bastante apoyo académico (Schneider, 1991; Oxhorn, 1994; Roberts, 1998; Drake, 2003; Silva, 2004; Posner, 2004, 2008). No obstante, no se ha avanzado en la explicación de la reactivación de las mismas.

Por la amplitud del público objetivo potencialmente implicado ante reclamos estudiantiles, la ruptura entre organizaciones sociales y sistema político generó un gran impacto, como lo evidencian las movilizaciones de 2011. Las reformas de Bachelet posteriores a la Revolución de los Pingüinos de 2006 fueron consideradas como una

traición por parte del movimiento estudiantil, mermando considerablemente los recursos de la Concertación (tradicional aliado del movimiento estudiantil) de contener sus demandas. El triunfo de la derecha en 2009 no hizo más que agravar la distancia entre las organizaciones (ya desencantadas del sistema de partidos en general) y el sistema político en su conjunto. No obstante, se sostiene en esta investigación que es posible encontrar en otras organizaciones sociales patrones similares de distanciamiento con el sistema político, que permitían anticipar la decadente capacidad del Estado chileno para mantener desmovilizada a la sociedad.

El movimiento mapuche ofrece un caso muy distinto del estudiantil, de particular interés para comparar patrones análogos de distanciamiento entre el sistema político institucionalizado y actores sociales. Por sus características, entre ellas el menor número de público potencialmente afectado por sus demandas y su concentración geográfica, este distanciamiento no generó movilizaciones masivas. No obstante, sí tuvo impactos en los patrones de movilización y repertorios de acción del movimiento, llevando a su radicalización y haciendo de este movimiento uno de los más activos desde el retorno de la democracia hasta nuestros días.

A través de la comparación de estos casos de disímiles características y resultado similar en términos de endurecimiento de sus posiciones, esta investigación buscará dar cuenta de la importancia que las relaciones entre actores sociales, partidos y gobierno tienen en países económica y políticamente estables para explicar movilizaciones sociales.

I. Las explicaciones teóricas de la movilización social

La teoría sobre movimientos sociales ha solido privilegiar tres tipos de explicaciones para explicar el nacimiento y desarrollo de movilizaciones (McAdam et al, 1996). En primer lugar, la Estructura de Oportunidad Política (EOP). Este es el eje de la corriente que ha sido denominada Teoría del Proceso Político (Campbell, 2005: 44), tal vez la más influyente de esta área de estudios. Desde esta perspectiva, la política institucional ofrece constreñimientos y oportunidades que explican las acciones de potenciales actores sociales desafiantes. En segundo lugar, hay quienes se centran en las características de las organizaciones que lideran los movimientos sociales. Desde una lógica claramente organizacional, la Teoría de la Movilización de Recursos pone el énfasis en este tipo de factores a la hora de comprender los distintos desempeños a la hora de movilizar a la ciudadanía y obtener resultados (McCarthy y Zald, 1977). En tercer lugar, existen autores que han destacado la importancia de variables culturales. Esto se ha hecho de dos maneras principales. Por una parte, a través del concepto de *framing* se han destacado los procesos de interpretación colectiva que median entre las oportunidades y la acción de los grupos (Benford y Snow, 2000). Por otra parte, la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales europea incorporó la importancia de la cultura desde una perspectiva de cambio macro-social. El pasaje a la sociedad post-industrial habría generado nuevos grupos y demandas asociadas a los mismos, distintos a la organización clásica de la sociedad industrial moderna (Touraine, 1985). Una cuarta vertiente, que ha tenido menos impacto, es la de algunos autores que han señalado la importancia de las emociones a la hora de analizar este tipo de fenómenos⁶ (Goodwin et al., 2001).

Sin dudas, todos estos marcos analíticos ofrecen claves importantes para comprender la realidad chilena actual. No obstante, en este trabajo se adoptará como enfoque privilegiado el de Estructura de Oportunidades Políticas (EOP), en el entendido de que

⁶ Estos elementos también se encuentran presentes en algunos desarrollos de la Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (Melucci, 1996).

mucho de lo que está en juego en Chile refiere a la relación entre organizaciones sociales, los partidos políticos y el gobierno (y desde una perspectiva más general, el Estado). Estos son los actores principales a tener en cuenta, y sus interacciones se dan en formas más o menos institucionalizadas (Goldstone, 2003). Atender sus interacciones, implica incorporar a la mirada propiamente estructural sobre la institucionalidad política las relaciones dinámicas entre estos tres actores. En palabras de Pierson (2004), es necesario poner la política en el tiempo.

Como será patente en la comparación entre movimiento estudiantil y mapuche, los recursos de movilización de los distintos movimientos impactan en sus estrategias y capacidad de movilización, pero son sus vínculos con los actores institucionalizados los más determinantes a la hora de privilegiar acciones disruptivas de enfrentamiento frontal o posturas más moderadas que privilegien alianzas con algunos miembros del sistema político. Con respecto a los procesos de enmarcamiento (*framing*), se afirma en esta investigación que es importante tenerlos en cuenta en tanto procesos cognitivos que definen las percepciones de proximidad y distancia entre los actores políticos y sociales. Por ejemplo, la progresiva identificación de la Concertación por parte de actores sociales como un actor cada vez más funcional al modelo económico que buscan alterar, es un elemento importante para comprender la pérdida de capacidad de ésta (y a través de ella del sistema político en general) para desmovilizar a la ciudadanía. Pero nuevamente, el factor que se considera más determinante son las relaciones entre los actores políticos y sociales, independientemente de las variables que colaboren a modificarlas.

EOP y teoría sobre contienda política: la necesidad de un enfoque dinámico y relacional

La Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) es uno de los conceptos más importantes en el estudio de los movimientos sociales y la literatura de contienda política en general. En su estudio sobre los determinantes de revueltas en ciudades norteamericanas en el año 1968, Peter Eisinger abrió el camino al definir la EOP como “...a function of the degree to which groups are likely to be able to gain access to power

and to manipulate the political system.” (1973: 25)⁷. Observando las características institucionales del entorno político, Eisigner concluyó para su estudio que existía una relación de U invertida entre tipo de EOP y protestas: aquellas ciudades con EOP muy cerradas o muy abiertas experimentaron menos protestas que aquellas con elementos mixtos de apertura y cerrazón en su EOP. Esta definición fue sumamente influyente en estudios posteriores sobre movilizaciones sociales, notoriamente en aquella corriente denominada Teoría del Proceso Político (Campbell 2005: 44; Alonso, 2009: 54), considerada por algunos autores como hegemónica en el área (Lichbach, 1998; Goodwin y Jasper, 2004: 3).

Las críticas: El carácter estático de la EOP y el estiramiento conceptual

El enfoque de EOP ha recibido un buen número de críticas. Comencemos por destacar dos de ellas. En primer lugar, encontramos referencias a la “dureza” del concepto. En segundo lugar, el éxito del mismo llevó a su estiramiento conceptual (Sartori, 1970).

Con respecto a la primera crítica, el mismo nombre del concepto da cuenta de un carácter estructural, pero algunos autores sostienen que esto genera un sesgo excesivo hacia lo estático, perdiendo así la capacidad de captar las características inherentemente dinámicas que suelen tener los movimientos sociales. Estos autores afirman que la incorporación de nociones como “proceso político” y “oportunidades” no lograron darle fluidez al enfoque, ya que siguen siendo utilizados principalmente desde una lógica estructural (Goodwin y Jasper, 1999: 29). Además, la mirada centrada en las estructuras impide captar los aspectos relacionales que existen entre instituciones, autoridades y grupos desafiantes. Como afirman Gamson y Meyer (1996: 276), *“Opportunities may shape or constrain movements, but movements can create opportunities as well.”* Es importante señalar que este problema fue reconocido por tres de los exponentes más importantes de la Teoría del Proceso Político. *Dynamics of Contention* (DOC) intentó superar la mirada estático-estructural para incorporar los aspectos dinámicos de la movilización social. Esta es probablemente una de las mayores

⁷ Doug McAdam (1996: 23) reconoce en Michael Lipsky (1970) a otro precursor en la materia, aunque este autor no ofreció una definición precisa del concepto.

contribuciones de este trabajo de McAdam et al. (2001), que también generó grandes críticas por su pretensión excesivamente rupturista con la investigación previa (Diani, 2003: 112; Rucht, 2003: 113, Taylor, 2003: 123). En este trabajo, se concuerda con DOC en la importancia de abandonar visiones excesivamente estructurales, pero se destaca la importancia de mantener una mirada centrada en la EOP.

La segunda crítica al enfoque de EOP refiere a la existencia de estiramiento conceptual al aplicárselo de muy distintas maneras. Según Gamson y Meyer (1996: 275), el concepto de EOP *“It threatens to become an all-encompassing fudge factor for all the conditions and circumstances that form the context for collective action. Used to explain so much, it may ultimately explain nothing at all.”* Para algunos autores, se ha estirado el concepto al agregársele cuestiones que no son oportunidades, no son estructura, no son políticas, o ninguna de las tres (Koopmans, 1999: 94). La definición original de Eisinger, bastante general, fue refinada por trabajos posteriores. En ese esfuerzo, muy distintas interpretaciones se hicieron del concepto, lo que explica parte de la crítica recién reseñada. Distintos autores han integrado dimensiones al concepto, identificando características de la estructura política de los países que podrían volverlo más o menos sensible a las demandas sociales. Parte de la idea de estiramiento conceptual se explica por los distintos factores que han sido considerados como importantes. Según Sidney Tarrow (1988: 430), *“Political opportunity may be discerned along so many directions and in so many ways that it is less a variable than a cluster of variables-some more readily observable than others.”* ¿Cuáles son estas distintas variables?

Tras analizar algunos de las propuestas más influyentes sobre EOP, Doug McAdam (1996: 27-28) distinguió tres dimensiones que a su juicio generan bastante consenso como integrantes fundamentales de la EOP:

- 1- La apertura o cerrazón relativa del sistema político institucionalizado
- 2- La estabilidad o inestabilidad de los alineamientos de las élites que normalmente sostienen una sociedad política
- 3- La presencia o ausencia de aliados en las élites

Aquí notamos dos tipos distintos de elementos. Por una parte, la primera dimensión refiere a cuestiones institucionales formales y legales. Por otra, las dimensiones segunda y tercera incorporan la importancia de los arreglos informales que también conforman

relaciones de poder en los distintos sistemas políticos. Según McAdam, la tercera dimensión captaría un componente más efímero que la segunda. Finalmente, McAdam incorpora una cuarta dimensión, aunque reconociendo que no es consensual entre los estudiosos: la capacidad y propensión del Estado hacia la represión.

Se habrá notado que los componentes de la EOP que se han presentado refieren a realidades objetivas de la estructura de poder político en una sociedad. Sin embargo, algunos autores han señalado con acierto que el valor analítico de las oportunidades política tiene sentido sólo cuando los actores interesados en las mismas las perciben como tales. Del mismo modo, si existe objetivamente una oportunidad política que no es percibida por los actores sociales, ésta no tendría mayor importancia (Tarrow, 1988: 430; Gamson y Meyer, 1996: 283). De esta manera, se han integrado variables cognitivas a la conceptualización de EOP, particularmente relevantes cuando se busca desarrollar una mirada relacional de interacción entre distintos actores.

Un enfoque relacional y dinámico para países estables

Parte del estiramiento conceptual que se ha diagnosticado en el uso del concepto EOP tiene que ver con la diversidad de casos en que se lo ha aplicado. La formulación original de Eisinger tiene el mérito de haber sentado una idea simple pero sugestiva: contextos políticos más o menos abiertos condicionarán las posibilidades de movilización social. El problema se presenta a la hora de aplicar esta idea en diferentes situaciones y con objetivos diversos. Por ejemplo, es evidente que en comparaciones cross-nacionales, una mirada a los aspectos más estructurales de la EOP resulta apropiada. Tal fue la estrategia de Kitschelt (1986) al comparar movimientos similares en distintos países. En este tipo de estudios, es importante tener en cuenta las diferencias más importantes entre países, habitualmente vinculadas a aspectos estructurales. No obstante, si nos interesan miradas longitudinales dentro de un mismo país relativamente estable, los aspectos estructurales serán constantes (Koopmans, 1999: 100). Por lo tanto, en estos casos es importante prestar atención a aspectos más dinámicos como la agencia de los actores o situaciones coyunturales que puedan afectar las relaciones entre los mismos. Esto notoriamente en casos como el chileno, donde la estabilidad ha sido la tónica imperante desde la vuelta de la democracia. La varianza en las formas de movilización y éxito de las mismas dentro de un mismo movimiento en el tiempo, o entre distintos movimientos, deberá ser explicada por su relacionamiento con

los factores estructurales, pero más que nada por la evolución de su relacionamiento en el tiempo con los actores institucionales existentes. Notoriamente, porque las perspectivas del surgimiento de nuevos actores institucionales parece improbable por la dureza del diseño institucional en lo que concierne a los costos de entrada para nuevos actores políticos.

El problema del estiramiento conceptual no es a nuestro juicio insuperable. Asumiendo que un concepto se conforma por distintas dimensiones (Goertz, 2005), lo importante es lograr una buena definición del mismo e identificar cuáles son más relevantes para el tipo de estudio que queremos realizar. Es necesario partir de una definición clara del concepto, pero esto no implica que al utilizarlo para explicar alguna realidad no sea correcto concentrarse en algunas dimensiones del mismo y dejar de lado otras que puedan ser irrelevantes para el caso en cuestión. Al diseñar un estudio longitudinal, será importante dejar parcialmente de lado aquellas dimensiones constantes en el tiempo, para concentrarse en las que varían, de modo de poder explicar la varianza en nuestra variable de interés⁸.

¿Cómo definir la EOP para estudiar la movilización social en Chile post-transicional? Si observamos la realidad chilena, de las últimas dos décadas, las dos primeras dimensiones “consensuales” identificadas por McAdam parecen bastante constantes. El grado de apertura del sistema político institucionalizado no ha cambiado, ha sido desde la transición hasta nuestros días muy bajo. El sistema electoral binominal dio gran estabilidad al sistema de partidos, estableciendo costos de entrada a la contienda electoral elevados para eventuales nuevos actores. Esto explica la extrema estabilidad del sistema de partidos chileno, y la invariabilidad de las dos coaliciones que han dominado la vida política del país desde los noventa (Carey, 2002). La segunda dimensión consensual tampoco parece haber variado. La estabilidad de los alineamientos de las élites que sostienen la sociedad política permanece constante. Desde la redemocratización, las relaciones privilegiadas entre empresariado y partidos políticos (Rehren, 1995) no cambiaron sustantivamente. Los actores sociales que buscan alterar aspectos estructurales del modelo socio-económico se enfrentan por tanto al

⁸ Dejar “parcialmente de lado” refiere a que no se deben descartar las variables que asumen valores constantes, ya que su interacción con aquellas que fluctúan debe ser tomada en cuenta (el distanciamiento entre actores sociales y políticos genera efectos distintos según si esto sucede en un contexto más o menos abierto al surgimiento de nuevos actores políticos).

relativo consenso entre actores políticos institucionalizados sobre la bonanza del “modelo chileno” así como al empresariado, uno de sus respaldos más importantes. La alternancia en el gobierno provocada por la victoria de Piñera en 2009 no se origina en, ni generó posteriormente, un cambio en los alineamientos de las élites que sostienen la sociedad política chilena.

Por lo tanto, para comprender cambios en los patrones de movilización desde la EOP, se hace necesario ahondar en la tercera dimensión identificada por McAdam: la presencia o ausencia de aliados en las élites. Así formulada, esta dimensión ofrece una perspectiva estática. No obstante, para poder explicar cambios en los grados y formas de movilización en contextos de estabilidad estructural, es necesario una mirada dinámica que nos permita captar lo que las miradas más rígidas de EOP dejan fuera, el “contexto de interacción” entre los distintos actores (Kriesi, 1995: 169). Y para el tipo de explicación que se busca generar en esta investigación, es clave observar este contexto de interacción en el tiempo, de modo de captar la evolución de las relaciones entre organizaciones sociales, los partidos políticos y el gobierno. A través de las relaciones con estos últimos dos actores, las organizaciones sociales forjan su visión del Estado en términos más generales. Una de las hipótesis que aquí se plantean, es que el desencanto con la totalidad de los partidos políticos institucionalizados, en contextos donde no se vislumbra la posibilidad de surgimiento de nuevos actores, agrava la visión crítica de las organizaciones sociales respecto del Estado en general (la totalidad del sistema político), promoviendo la profundización y radicalización en la movilización.

Esta mirada basada en la agencia y estrategias de los actores implica tomar en serio las críticas a las visiones demasiado “objetivas” de la EOP (Tarrow, 1988; Gamson y Meyer, 1996). Es preciso tener en cuenta los marcos cognitivos de los actores a la hora de interpretar lo que consideran oportunidades, así como las evaluaciones mutuas en sus interacciones (confianzas, desconfianzas, lealtades, etc.). También implica tener en cuenta a la ciudadanía en general, en el entendido de que en democracia las organizaciones sociales apelan de forma privilegiada a la misma, de modo de ejercer presión sobre los actores institucionalizados. En tercer lugar, debe integrarse la perspectiva sobre los recursos de movilización de las organizaciones sociales desafiantes. Las capacidades de acción condicionarán sus estrategias, así como su relacionamiento con los partidos políticos y el gobierno.

II. Movilización social y sistema político en Chile

Las movilizaciones estudiantiles de 2011, así como las lideradas por los secundarios en 2006, llamaron la atención en un Chile que se concebía como un país política y socialmente desmovilizado. Desde la academia, los déficits de participación y representación de la democracia chilena post-transicional ya habían sido señalados por un buen número de autores (Moulián, 1997; Garretón, 1999, 2004; Navia, 2004; Toro, 2007). Pero estos análisis se enmarcaron en una conceptualización de tipo más bien pasivo de la ciudadanía chilena, donde las acciones de la sociedad civil frente al Estado se veían como fragmentarias y reactivas, en un contexto general de desarticulación social. Ninguno de estos análisis hacía presagiar una reacción ciudadana frente a la política institucional como la de 2011, o la Revolución Pingüina de 2006. Gonzalo De La Maza, especialista en el estudio sobre la sociedad civil chilena, afirmaba hacia 2003: “La desarticulación social no se convierte en movilizaciones colectivas, ni en demandas políticas, sino que se expresa principalmente como temor e inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios. Es decir ha habido un cambio en las bases mismas de la sociabilidad, marcada por la retracción a los espacios privados e íntimos, la desconfianza hacia “los otros” y la falta de proyectos compartidos” (2003: 17). ¿Cómo entender este tipo de diagnósticos? ¿Teniendo en cuenta los mismos, cómo explicar la capacidad de movilización de las organizaciones estudiantiles durante el año 2011? ¿Cómo explicar la persistencia de las movilizaciones mapuche en la última década? Por su estabilidad, Chile aparece como un caso crucial para estudiar estallidos sociales.

La tesis de la desmovilización de la sociedad chilena redemocratizada

Una mirada de mediano plazo a la movilización social en Chile evidencia importantes oscilaciones en los niveles de movilización social. Desde mediados del siglo XX y hasta

el golpe de Estado de 1973, se constatan niveles crecientes de movilización social bajo el ala de los partidos políticos, verdaderos ejes estructuradores de las relaciones entre política y sociedad (Garretón, 1989). El golpe de Estado rompió con esta dinámica, restringiendo abruptamente los espacios de interacción político-partidaria y de movilización social por medio de la represión (Guillaudat y Mouterde, 1988). A partir de la crisis económica de 1982, se dio un resurgimiento de la movilización, notoriamente con las llamadas “protestas sociales” que acontecieron entre 1983-1986 y se orientaron a buscar la caída del régimen. Con el recrudecimiento de la represión en 1986, este objetivo perdió fuerza, ganando peso e imponiéndose entre los opositores la estrategia de seguir el calendario electoral de la Constitución de 1980 como vía privilegiada para buscar la transición (Moulián, 1997). Las movilizaciones sociales pasaron a orientarse desde ese entonces a apoyar procesos electorales (plebiscitos, elecciones), retomando los partidos el liderazgo que habían perdido en parte durante las protestas sociales. A su vez, una vez llegada la democracia, los líderes políticos de la Concertación pidieron a las organizaciones populares (notoriamente sindicales), evitar la conflictividad social en aras de asegurar la gobernabilidad y evitar un retorno autoritario (Drake, 2003; De La Maza, 2005). Lograda la transición y obtenido el gobierno, los partidos de la Concertación apelaron entonces a la desmovilización como estrategia de sobrevivencia democrática.

Esta realidad de una redemocratización con una baja de la intensidad en la movilización, tanto respecto a la época previa a la dictadura como a los años anteriores a la transición, fue señalada por muchos autores (Oxhorn, 1995; Schneider, 1995). Según Roberts (1998), los democratizadores enfrentaron una disyuntiva entre consolidar la democracia o profundizarla. En el entendido de que la profundización de la democracia implicaría abrir canales de participación y de atención de demandas sociales que podrían ir contra los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, Roberts afirma que avanzar en este sentido podría haber puesto en riesgo la estabilidad de la democracia recién recuperada. Esta fue la lectura que habrían hecho los gobernantes de la transición al buscar controlar los niveles de movilización y conflicto social. Este dilema es también una suerte de paradoja: en el contexto transicional una mayor democratización pondría en riesgo a la democracia misma (O’Donnell y Schmitter, 1986; Roberts, 1998: 7).

La búsqueda por limitar la movilización social fue interpretada en un comienzo como un llamado de los gobernantes a la sensatez de los actores sociales, para minimizar las

posibilidades de un retroceso autoritario. Por ejemplo, los sindicatos, muy golpeados durante la dictadura, aceptaron moderar sus demandas en el contexto del Acuerdo Marco impulsado por Alwin, priorizando la mejora de condiciones laborales y salariales sin llevar adelante una agenda de verdadera reforma estructural (Drake, 2003). No obstante, al pasar de los años fue quedando claro que las demandas de reforma estructural del modelo económico instaurado por los militares no serían atendidas por los gobiernos concertacionistas. Al contrario, el “modelo de la Concertación” consistió en el mantenimiento de sus principales lineamientos económicos agregando una institucionalidad social y de bienestar de modo de lograr “crecimiento con equidad” (De La Maza, 2004; Muñoz, 2007). A su vez, los primeros gobiernos de la transición generaron una serie de instituciones que integraron a muchos miembros de las organizaciones sociales más activas durante la dictadura (las mujeres en el SERNAM y los indígenas en la CONADI por ejemplo). De este modo, también se logró disminuir en buena medida posibles causas de conflictividad social. Según Silva (2009), la generación de esta nueva institucionalidad fue una de las estrategias de la Concertación para reestructurar la relación sociedad-Estado a través de mecanismos de integración y representación política. La segunda estrategia destacada por este autor fue la creación de comisiones de alto nivel ad-hoc, en los casos en que se suscitaban problemas concretos, convocando representantes de todos los bandos implicados en las disputas (Silva, 2009: 263).

Por lo tanto, si en los años previos al golpe de Estado la sociedad chilena se caracterizaba por altos niveles de movilización social bajo el liderazgo de los partidos políticos, con el resurgir de la democracia este patrón no se retomó. Dentro del sistema político representativo el modelo económico de desarrollo se volvió consensual, al aceptar la Concertación los lineamientos principales del mismo, y los partidos políticos vieron en las movilizaciones sociales más un riesgo para la democracia que una estrategia de profundización de la misma. En definitiva, el sistema político institucional emergente de la transición buscó evitar la movilización social, encausando los debates políticos en un sistema político institucional cerrado con actores sumamente estables. Al encontrarse en el gobierno los partidos tradicionalmente más vinculados con las organizaciones sociales movilizadas, se articularon tanto recursos partidarios como gubernamentales para contener las eventuales movilizaciones. Esto en un contexto donde los actores sociales más importantes, por ejemplo los sindicatos, re-emergían

sumamente golpeados por el trato recibido durante la dictadura. Por otra parte, la amenaza latente de un retorno autoritario llamaba a la cautela a la hora de disputar los intereses de grupos poderosos que apoyaban el modelo socio-económico instaurado por los militares. No obstante, a medida que pasaron los años y la amenaza del retorno autoritario se fue diluyendo, las posiciones entre el gobierno y algunas organizaciones se fueron distanciando, al quedar claro que los partidos de la Concertación no pretendían alterar elementos estructurales del modelo de desarrollo.

Mapuches, estudiantes, partidos, gobierno y Estado

Uno de los principales trabajos que prestó atención a las relaciones dinámicas entre Estado, partidos y movimientos sociales fue el libro de Goldstone (2003), *States, Parties and Social Movements*, que reunió una serie de colaboraciones sobre diversos casos desde esta óptica. Buscando superar la visión unidireccional, estática e impermeable de relacionamiento entre estos actores, la que primaba en los enfoques clásicos de EOP, Goldstone (2003: 2) afirma que “(...) *state institutions and parties are interpenetrated by social movements, often developing out of movements, in response to movements, or in close associations with movements*”.

En este trabajo se comparte esta visión, pero se busca profundizar en las dinámicas de acercamiento y alejamiento entre estos actores, así como descifrar los efectos políticos de las mismas. Prestar a movimientos tan distintos como el mapuche y el estudiantil, permitirá identificar aquellos procesos similares en la evolución de su relacionamiento, y consecuencias del mismo, con los partidos y el gobierno. Por lo tanto, la comparación entre ambos movimientos será realizada desde un diseño de casos más diferentes (Przeworski y Teune, 1970). El progresivo alejamiento entre las organizaciones sociales y el sistema político es considerado la variable común que explica la intensificación en las demandas y repertorios de acción de ambos movimientos.

Estado, partidos políticos y conflicto mapuche

Si se piensa en los vínculos entre reclamos sociales y el Estado desde la transición, no caben dudas que las relaciones más tensas con el Estado se han producido entre éste y algunas organizaciones y comunidades mapuche que han ido radicalizando sus repertorios de acción para visibilizar sus demandas. La aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y de la Ley Antiterrorista contra dirigentes mapuche por parte de las autoridades (tanto de la Concertación como de la Alianza recientemente), da la pauta del grado de conflictividad al que se ha llegado. A esto se suman los constantes enfrentamientos violentos entre carabineros y mapuches, que en tres ocasiones culminaron con mapuches muertos por balas policiales (Alex Lemún en 2002, Matías Catrileo en 2008 y Jaime Mendoza Collío en 2009, los últimos dos asesinados por la espalda) y en una ocasión con un carabinero muerto (Hugo Albornoz, en un confuso enfrentamiento en abril de 2012 que aún no ha sido aclarado⁹).

El conflicto entre mapuches y el Estado chileno tiene raíces históricas profundas (Bengoa, 1999; Saavedra, 2002; Toledo Llancaqueo, 2006). Sin dudas, estas deben ser tenidas en cuenta en cualquier análisis sobre los reclamos actuales. No obstante, en este trabajo se afirma que es posible identificar desde la transición pautas específicas de relacionamiento con el sistema político que explican el cambio de ciertos patrones de movilización.

Los primeros años de la transición estuvieron marcados por el Acuerdo de Nueva Imperial, firmado por Aylwin (como candidato presidencial) y diversas organizaciones indígenas. Una vez en el gobierno, la Concertación buscó llevar adelante los puntos allí acordados, pero el debate parlamentario y la mayoría de la derecha en el Senado imposibilitó buena parte de las reformas promovidas. El reconocimiento constitucional

⁹ Aún no se ha aclarado la autoría del disparo que le dio muerte. A pesar de la versión de carabineros, no está demostrado que el tiro haya sido disparado por parte de los comuneros mapuche. Por el contrario, los miembros de la comunidad Wente Winkul Mapu afirman que fue asesinado por sus propios colegas carabineros, en fuego cruzado. Desde su punto de vista, la acusación de carabineros sería un montaje para ocultar el asesinato ocurrido por error entre sus propias filas.

del carácter pluricultural de Chile, así como la ratificación del Convenio 169 de la OIT¹⁰ son algunos de los acuerdos que no fueron cumplidos (Bengoa, 1999). En el marco del acuerdo se creó en el gobierno de Aylwin la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Desde una visión crítica de la misma, Toledo Llancaqueo afirma que su rol principal respecto a la política de tierras era "... acotar las reclamaciones de tierras usurpadas y contener la demanda indígena, en el contexto de una frágil transición democrática pactada. (2006: 97)" En 1993 se promulgó la Ley Indígena N°19.253, que entre otras cosas, estableció la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Lo importante de esta institución, es que incluía en su seno representantes de los pueblos originarios. Siempre siguiendo a Toledo Llancaqueo, hasta 1998 la política de la CONADI estuvo marcada por estas características: i) El intento de definición del concepto de tierras indígenas, de modo de restringir las demandas de tierras a aquellas vinculadas a los Títulos de Merced y la Reforma Agraria (excluir las tierras "antiguas"). ii) La generación de un catastro con los casos de reclamo de tierras. iii) Tomar la existencia de conflictos como criterio para tratar los reclamos, sin conflictos los casos no serían tratados. iv) La compra por parte del Estado de las tierras reclamadas, para evitar la radicalización de los conflictos (Toledo Llancaqueo, 2006: 99).

Esta nueva relación entre el Estado y la comunidad mapuche, y las tomas simbólicas llevadas adelante por el Consejo de Todas las Tierras en el marco de los 500 años de la llegada de Colón a América marcan la complejidad de la misma. Pero el fracaso definitivo del período inaugurado por el Acuerdo de Nueva Imperial suele identificarse en 1998, cuando la fuerte polémica sobre la instalación de hidroeléctrica Ralco de ENDESA en tierras indígenas culminó con la expulsión del Director de la CONADI, Domingo Namuncura¹¹, quien se oponía a la construcción de la misma y era representante mapuche (Aylwin 2000; Bengoa, 2002: 218-219; Fuenzalida Bascuñan, 2003).

Esta ruptura entre la institucionalidad estatal impulsada por el gobierno de la Concertación y algunos sectores mapuche, abrió una etapa que se caracterizó por una radicalización en las demandas y acciones de parte de algunos sectores del movimiento mapuche. En forma paralela a la crisis de la CONADI, en diciembre de 1997 tres

¹⁰ El Convenio 169 fue ratificado recién en el gobierno de Michele Bachelet.

¹¹ Poco antes el gobierno había destituido a su predecesor, Mauricio Huenchulaf.

camiones de la empresa Forestal Bosques Arauco fueron quemados por activista mapuches (Marimán, 1998), inaugurando un repertorio de acción disruptivo que se volvió de gran importancia hasta nuestros días. Tanto el conflicto de la hidroeléctrica Ralco como de la Forestal Bosques Arauco marcan los problemas que se suscitaron entre el modelo de desarrollo económico promovido por el gobierno y las colectividades mapuche, cuando inversiones productivas de gran escala se fueron instalando en la Araucanía (Aylwin, 2000; Toledo Llancaqueo, 2006). La revisión de los datos sobre Chile del Observatorio Social de América Latina de CLACSO, que releva mensualmente las distintas movilizaciones sociales, evidencia que entre el año 2000 y la actualidad el movimiento mapuche ha sido de los más activos y constantes en Chile¹². Pero no sólo se radicalizaron las formas de protesta, sino que como afirma Toledo Llancaqueo, cambió también el enfoque de las demandas, con una amplificación de las mismas (Toledo Llancaqueo, 2006: 104). Estos procesos se dieron en un contexto de alejamiento general de los partidos políticos. Si tradicionalmente estos constituían frentes indígenas a los que los distintos grupos mapuches adscribían, con las nuevas demandas se fue haciendo patente un alejamiento de los partidos políticos en general, modificándose así las relaciones entre comunidades y organizaciones mapuches con los partidos políticos, y a través de ellos con el gobierno y el Estado (De La Maza, 2010: 128).

El movimiento estudiantil

La Revolución Pingüina de 2006 y las movilizaciones estudiantiles de 2011 lograron dimensiones que parecían olvidadas en el Chile de la transición. Según Gonzalo De La Maza (2010: 9), la Revolución de los Pingüinos fue la primera manifestación social masiva en las calles desde 1989. No obstante, esto no quiere decir que el movimiento estudiantil no haya estado activo desde el retorno de la democracia. Evidentemente, existen importantes diferencias entre el movimiento secundario y el universitario, pero para tener un primer acercamiento a sus relaciones con los partidos y el gobierno pueden destacarse algunos rasgos principales de sus patrones de movilización. Durante

¹² Datos disponibles en línea en : <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=> [consultado el 12/12/2011]

el primer gobierno de la Concertación, se constató un descenso de la misma respecto de los niveles existentes en los últimos años de la dictadura (De La Maza, 2005: 116). Esto es razonable si pensamos en las características propias de un contexto de transición. A partir de la segunda mitad de los noventa, los niveles de movilización aumentaron progresivamente, pero sin llegar a niveles masivos hasta 2006. Este incremento fue paralelo a la ampliación de las demandas por parte de las organizaciones estudiantiles a los gobiernos. Mientras que desde un principio estuvieron sobre la mesa demandas materiales como el acceso a becas, las tarifas y modalidades del pase escolar de transporte público, el costo de la vida estudiantil o el acceso a la educación terciaria, progresivamente se fueron incorporando demandas de cambios estructurales, notoriamente desde el fin del gobierno de Aylwin (De La Maza, 2005; Sands Burton, 2009: 230). Un ejemplo de movilización por demandas materiales fue el “mochilazo” de 2001, en que estudiantes secundarios se activaron y movilizaron por varios días para exigir mejoras en las condiciones del transporte público (Cornejo et al. 2007; Aguilera Ruiz, 2011).

Las políticas educativas de los gobiernos de la Concertación fueron atendiendo algunos de los reclamos materiales, pero no existieron reformas estructurales que pusieran en duda las bases del modelo educativo (primario, secundario o terciario) diseñado durante el régimen militar. La estrategia privilegiada por los gobiernos de la Concertación en educación primaria y media fue inyectar recursos, de modo de mejorar la calidad de la educación y ampliar su cobertura, pero de forma de mejorar el modelo del sistema educativo sin alterar sus bases (por ejemplo, la municipalización de la educación pública). En términos de ampliación de cobertura, el modelo fue exitoso. En 1990, un 52% de los jóvenes de entre 20 y 24 años había culminado la secundaria. Hacia 2006 lo había hecho un 80%. Con respecto a la educación terciaria, se mantuvo también el sistema heredado de la dictadura, basado prioritariamente en el financiamiento por parte de los estudiantes. A nivel terciario, también se hicieron importantes avances en términos de cobertura. De 220.000 alumnos matriculados en 1990, se pasó a aproximadamente 600.000 en 2005 (OCDE, 2009: 28-31). La ayuda del Estado para el financiamiento de los estudios terciarios ha corrido por dos carriles principalmente. En primer lugar, el otorgamiento de becas. El monto de recursos dedicados a las mismas ha aumentado considerablemente desde el retorno de la democracia. Entre 2000 y 2007 pasó de U\$S 40 millones a U\$S 173 millones. No obstante, para 2009 sólo un 13,8% de

los estudiantes percibían algún tipo de beca, y de los estudiantes de los dos quintiles más pobres, lo hacía un 46.4% (se trata de becas que no cubren necesariamente la totalidad de los aranceles). La otra vía de apoyo a los estudiantes universitarios por parte del Estado han sido los préstamos estudiantiles. En 1994 se estableció el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), heredero del crédito Fiscal Universitario de 1981 y sus distintas modificaciones. Este. En 2005, de modo de ampliar la oferta, se creó el Crédito con Aval del Estado (CAE), que se ofrece en conjunto entre el Estado y bancos privados. Las condiciones son más favorables que las de los préstamos privados, pero bastante menos favorables que los créditos del FSCU. Estos créditos no hacen en principio distinción de ingresos y pueden ser solicitados por estudiantes de cualquier institución terciaria, siempre que se encuentre acreditada (OCDE, 2009: 111-118).

Las demandas enarboladas durante la Revolución de los Pingüinos y las movilizaciones de 2011, referían a la alteración de patrones estructurales del modelo educativo: la desmunicipalización de la educación pública primaria y media, el fin del lucro en establecimientos educativos, la gratuidad de la educación terciaria y la responsabilidad estatal por asegurar educación de calidad, por ejemplo. En 2011 la ruptura entre el movimiento estudiantil y los partidos políticos en general se hizo evidente. A pesar que desde la oposición la Concertación buscó generar puentes con el movimiento, y que dentro del sistema político institucionalizado es la coalición con mayor sensibilidad a sus demandas, los líderes estudiantiles procuraron constantemente marcar distancia frente a todo el espectro político partidario¹³.

Conclusión

El diálogo entre la literatura sobre movimientos sociales y el caso chileno puede ser fructífero de dos formas principales. En primer lugar, el enigma sobre el cambio en los patrones de movilización social en Chile ofrece un caso interesante para generar aportes teóricos a la literatura al integrar una mirada histórica y dinámica al enfoque sobre EOP en casos de relativa estabilidad estructural. Esto implica reconocer que algunos elementos de la EOP se mantienen fundamentalmente constantes, y que es la interacción

¹³ Incluso respecto al Partido Comunista, de fuerte presencia en el movimiento estudiantil, y partido extra-parlamentario hasta las últimas elecciones. Fuertes debates internos se produjeron en el movimiento estudiantil universitario respecto a la injerencia del Partido Comunista (varios de los líderes más emblemáticos del movimiento pertenecen a la Juventud Comunista).

entre estos y aquellos componentes de la EOP más dinámicos y cambiantes que explica el cambio en los patrones de movilización en contextos estables. Además, el hecho de que estos procesos sociales se den durante un período relativamente largo de bonanza económica hará posible destacar los aspectos esencialmente políticos de los mismos. En segunda instancia, este abordaje puede echar luz sobre el caso chileno, que aunque ha sido uno de los casos latinoamericanos más abordados por la Ciencia Política desde la transición, ha sido tratado prioritariamente desde otros enfoques. La disciplina se ha preocupado mayoritariamente por los aspectos institucionales económicos y políticos de la transición democrática, siendo abordados los procesos de movilización o desmovilización socio-política como productos derivados de estas variables. Además, en los casos que se han abordado las movilizaciones sociales como objeto de estudio, no se han solido aplicar las herramientas de la literatura académica sobre movilización social y contienda política, y/o se han focalizado los trabajos en movimientos puntuales de forma ideográfica.

Bibliografía

Aguilera Ruiz, O. (2011). “Acontecimiento y acción colectiva juvenil. El antes, durante y después de la rebelión de los estudiantes secundarios chilenos en el 2006.” *Propuesta Educativa*, 35, p.11-36.

Alonso, A. (2009). “As Teorias dos Movimentos Sociais: Um Balanço do Debate”, *Lua Nova*, n°76, p.49-86.

Aylwin, J. (2000). “Los conflictos en el territorio mapuche: antecedentes y perspectivas”. *Perspectivas*, vol.3, n°2, p.277-300.

Baker, A. (2009). *The Market and the Masses in Latin America: Policy Reform and Consumption in Liberalizing Democracies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Benford, R.D. y D.A. Snow (2000). “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, *Annual Review of Sociology*, 26: 611-39.

Bengoa, J. (1999). *Historia de un conflicto: el estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago: Planeta/Ariel.

Campbell, J.L. (2005). “Where Do We Stand? Common Mechanisms in Organizations and Social Movements Research”. En G.F. Davis, D. McAdam, W. Richard, S. Mayer y N. Zald, *Social Movements and Organization Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 41-68.

Carey, J. (2002). “Parties, Coalitions, and the Chilean Congress in the 1990s”. En S. Morgenstern y B. Nacif (eds.), *Legislative Politics in Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press.

Collier, R.B. y S. Handlin (ed.) (2009). *Reorganizing Popular Politics: Participation and the New Interest Regime in Latin America*, Pennsylvania: The Pennsylvania University Press.

Cornejo, R., González, J. y J.P. Caldichoury (2007). *Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas educativas: el caso chileno*. FLAPE.

Davis, G.F., D. McAdam, W. Richard, S. Mayer y N. Zald (2005). *Social Movements and Organization Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.

De La Maza, G. (2004). “Políticas públicas y sociedad civil en Chile: el caso de las políticas sociales (1990-2004). *Política*, n°43 (Primavera), p.105-148.

De La Maza, G. (2005). *Tan lejos tan cerca: políticas públicas y sociedad civil en Chile*. Santiago: LOM.

De La Maza, G. (2010, tesis doctoral no publicada). *Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile*. Disponible en línea en: <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15360/proefschrift%20G.%20de%20la%20Maza.pdf?sequence=1> [consultado el 15/12/2011].

Diani, M. (2003). “The Terrestrial Emporium of Contentious Knowledge”, *Mobilization*, Vol.8, n°1, p.109-112.

Donoso Díaz, S. (2004). “Reforma y Política Educativa en Chile 1990-2004: El neoliberalismo en crisis”. *Estudios Pedagógicos*, Vol.XXXI, n°1, p.113-135.

Drake, P.W. (2003). “El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación”, *Revista de Ciencia Política*, Vol.23, n°2, p.148-158.

Drake, P. W. y Jaksic, I. (eds.) (1999). *El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa*. Santiago: LOM.

Eckstein, H. (1975). “Case studies and theory in political science”. En F. I. Greenstein y N. W. Polsby (eds.), *Handbook of political science. Political science: Scope and theory*, Vol. 7. Reading, MA: Addison-Wesley, p.94-137.

Eisinger, P. (1973). “The Conditions of Protest Behavior in American Cities”, *The American Political Science Review*, Vol.67, n°1 (Mar.), p.11-28.

Foerster, R. y S. Montecino (1988). *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970)*. Santiago: CEM.

Fuenzalida Bascuñán, S. (2003, no publicado). “El caso de la central hidroeléctrica Ralco: Atropello e incumplimiento de la ley y denegación de justicia”. Disponible en línea en: <http://www.omal.info/www/IMG/pdf/dc73.pdf> [consultado el 15/12/2011].

Gamson, W.A. y D.S. Meyer (1996). "Framing political opportunity". En D. McAdam, J.D. McCarthy y M.N. Zald (eds.), *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, p. 275-290.

Garretón, M.A. (1989). *The Chilean Political Process*. Boston: Unwin Hyman.

Garretón, M.A. (1999). "Balance y perspectivas de la democratización política chilena". En P.V. Milet (comp.), *Organización de la política: lecciones de medio siglo de historia chilena*, Santiago: FLACSO-Chile.

George, A.L. y A. Bennett (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

Gerring, J. (2007a). "Is There a (Viable) Crucial-Case Method?". *Comparative Political Studies*, Vol.40, n°3 (March), p.231-253.

Gerring, J. (2007b). "Review Article: The Mechanismic Worldview: Thinking Inside the Box". *British Journal of Political Science*, 37, p.1-19.

Goertz, G. (2005). *Social Science Concepts: A User's Guide*. Princeton/Oxford: Princeton University Press.

Goldstone, J.A (ed.) (2003). *States, Parties, and Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.

Goodwin, J. y J.M. Jasper (1999). "Caught in a Winding, Snarling Vine: The Structural Bias of Political Process Theory". *Sociological Forum*, Vol.14, n°1, p.27-54.

Goodwin, J. y J.M. Jasper (eds.) (2004) *Rethinking Social Movements: Structure, Meaning and Emotion*. Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.

Goodwin, J., Jasper, J.M. y F. Polletta (eds) (2001) *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. Chicago: The University of Chicago Press.

Guillaudat, P. y P. Mouterde (1998). *Los movimientos sociales en Chile 1973-1993*. Santiago: LOM.

Hédstrom, P. y R. Swedberg (eds.) (1998). *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jenkins, K.C y B. Klandermans (eds.). *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kriesi, H. (1995). "The Political Opportunity Structure of New Social Movements: Its Impact on Their Mobilization". En J.C. Jenkins y B. Klandermans (eds.), *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*. Minneapolis: University of Minnesota Press, p. 167-198.

Kitschelt, H. (1986) "Political Opportunity Structures and Political Protest: Anti-Nuclear Movements in Four Democracies". *British Journal of Political Science*, 16, p.57-85.

Kitschelt, H., Hawkins, K.A., Luna, J.P., Rosas, G.y E.J Zeichmeister (2010). *Latin American Party Systems*. Cambridge: Cambridge University Press.

Koopmans, R. (1999). "Political. Opportunity. Structure. Some Splitting to Balance the Lumping". *Sociological Forum*, Vol. 14, n°1, p.94-105.

Lichbach, M.I. (1998). "Contending Theories of Contentious Politics and the Structure-Action Problem of Social Order", *Annual Review of Political Science*, 1, p.401-24.

Lichbach, M.I. (2008). "Modeling Mechanisms of Contention: MTT's Positivist Constructivism". *Qualitative Sociology*, 31, p. 345-354.

Mahoney, J. (2001). "Beyond Correlational Analysis: Recent Innovations in Theory and Method". *Sociological Forum*, Vol.16, n°3 (September), p.575-593.

Mainwaring S. y T.R. Scully (1995). *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.

Marimán, J.A. (1998, no publicado). "Lumaco y el Movimiento Mapuche". Artículo disponible en línea en: <http://rehue.home.xs4all.nl/art/jmar6.html> [consultado el 15/12/2011].

McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency: 1930–1970*. Chicago: University of Chicago Press.

- McAdam, D. (1996). "Conceptual origins, current problems, future directions". En D. McAdam, McCarthy, J.D. y M.N. Zald (eds.) (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, p.23-40.
- McAdam, D., McCarthy, J.D. y M.N. Zald (eds.) (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Charles Tilly (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCarthy, J.D. y M.N. Zald (1977). "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", *American Journal of Sociology*, Vol. 82, N°6 (May), p. 1212-1241.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Moulián, T. (1997). *Chile Actual: Anatomía de un mito*. Santiago: LOM-Arcis.
- Muñoz, O. (2007). *El modelo económico de la Concertación 1990-2005: ¿reformas o cambio?*, Santiago: FLACSO.
- Navia, P. (2004). "Participación electoral en Chile, 1988-2001", *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIV, n°1, p.81-103.
- OCDE (2009). *Revisión de Políticas Nacionales de Educación: La Educación Superior en Chile*. OCDE/Banco Mundial.
- O'Donnell, G. y Schmitter P. (1986). *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies*. John Hopkins University Press.
- Oxhorn, P.D. (1994). "Where Did All the Protesters Go?: Popular Mobilization and the Transition to Democracy in Chile", *Latin American Perspectives*, Issue 82, Vol 21, n°3 (Summer), p.46-68.
- Oxhorn, P. D. (1995). *Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile*. University Park: Pennsylvania State University Press.

- Pierson, P. (2004). *Politics in Time: history, institutions and social analysis*. New Jersey: Princeton University Press.
- Posner, P.W. (2004). "Local Democracy and the Transformation of Popular Participation in Chile", *Latin American Politics and Society*, 46:3, p.55-81.
- Posner, P.W. (2008). *State, Market and Democracy in Chile: The Constraint of Popular Participation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Przeworski, A. y H.J. Teune (1970). *The Logic of Comparative Social Inquiry*. John Wiley & Sons Inc.
- Rehren, A. (1995). "Empresarios, Transición y Consolidación Democrática en Chile". *Revista de Ciencia Política*, Vol. XVII, n°1-2, p.5-61.
- Roberts, K.M. (1998). *Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Perú*. Stanford: Stanford University Press.
- Roberts, K.M. (2002). "Social Inequalities Without Class Cleavages in Latin America's Neoliberal Era". *Studies in Comparative International Development*, Vol.36, n°4 (Winter), p.3-33.
- Rucht, D. (2003). "Overcoming the 'Classical Model'?", *Mobilization*, Vol.8, n°1, p.112-116.
- Saavedra, A. (2002). *Los mapuche en la sociedad chilena actual*. Santiago: LOM.
- Salazar, G. (2007). "El viejo pacto social del librecambismo", *Revista Central de Sociología*, Año 2, n°2, p.11-28.
- Sands Burton, G.J. (2009, tesis doctoral no publicada). *Social democracy in Latin America: Policymakers and education reform in Brazil and Chile*. Disponible en línea en: http://mt.educarchile.cl/mt/jjbrunner/archives/PhD_Burton.pdf [consultado el 15/12/2011].
- Sartori, G. (1970). "Concept Misformation in Comparative Politics", *The American Political Science Review*, Vol.64, n°4 (Dec.), p. 1033-1053.

- Schneider, C. L. (1991). "Mobilization at the Grassroots: Shantytowns and Resistance in Authoritarian Chile", *Latin American Perspectives*, Issue 67, Vol.18, n°1 (Winter), p.91-112.
- Schneider C.L. (1995). *Shantytown Protest in Pinochet's Chile*. Philadelphia: Temple University Press.
- Silva, P. (2004). "Doing Politics in a Depoliticised Society: Social Change and Political Deactivation in Chile". *Bulletin of Latin American Research*, Vol. 23, n°1, p.63-78.
- Silva, E. (2009). *Challenging Neoliberalism in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stinchcombe, A.L. (2005). *The Logic of Social Research*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Tarrow, S. (1988). "National Politics and Collective Action: Recent Theory and Research in Western Europe and the United States". *Annual Review of Sociology*, Vol. 14, p.421-440.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*. New York/Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, V. (2003). *Plus ça change, plus c'est la même chose. Mobilization*, Vol.8, n°1, p.122-126.
- Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: Random House.
- Toledo Lancaqueo, V. (2006). *Pueblo Mapuche Derechos Colectivos y Territorio: Desafíos para la sustentabilidad democrática*. Santiago: Programa Chile Sustentable.
- Toro, S. (2007). "La inscripción electoral de los jóvenes en Chile: Factores de incidencia y aproximaciones al debate." En A. Fontaine et al. (eds.), *Modernización del Régimen Electoral Chileno*. Santiago: PNUD, p. 101-154.
- Touraine, A. (1978). *La Voix et le Regard*. Paris: Seuil.
- Touraine, A. (1985). "An Introduction to the Study of Social Movements", *Social Research*, Vol.52, n°4 (Winter), p.749-787.

Germán Bidegain Ponte

Van Cott, D.L. (2005). *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.